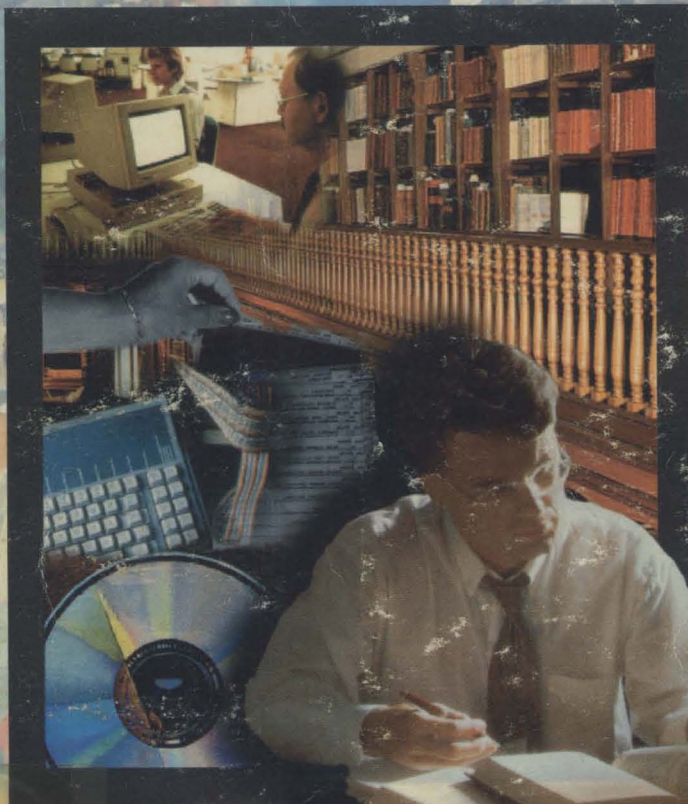


ESTELA MORALES CAMPOS

La Función Social del Bibliotecólogo y la Biblioteca



Z716.4
F85



Políticas públicas en América Latina y el papel estratégico de la biblioteca: nuevos desafíos

*Bruno Revesz**

La descentralización con participación ciudadana es una acción y la ilustración concreta del cambio de paradigmas en torno al desarrollo. Durante años, éste se ha concebido como una acción desde arriba hacia abajo, desde la cumbre del Estado hacia la sociedad. Sabemos ahora, y podemos percibirlo a partir de las experiencias de las bibliotecas de Piura, que el desarrollo cara al futuro tiene que ser, simultáneamente, como lo señala el gran escritor mexicano Carlos Fuentes en su hermosa obra *El espejo enterrado*, un desarrollo desde abajo hacia arriba, desde la periferia hacia el centro. Es una dimensión social, cultural, económica, política y ciudadana nueva que ha de ser tomada en cuenta en la elaboración de nuevas políticas públicas frente a los desafíos que representan la redefinición del Estado y de su papel, así como la redefinición de la función de bibliotecas públicas en las turbulencias de las nacientes sociedades de información.

Si existen en América Latina bibliotecas públicas de diversos tipos y sistemas, es que de una manera u otra se implementaron políticas públicas. Por lo general han sido puestas en marcha, hace décadas, por un tipo peculiar de Estado que en la jerga de los politólogos denominamos *Estado interventor*, un Estado que tenía por ambición *actuar sobre la sociedad*. Hoy nos encontramos en una fase de transición, donde los cambios económicos, políticos y culturales vinculados con el fenómeno de globalización —así como la crisis del Estado latinoamericano— exigen a nuestras sociedades, a las comunidades nacionales de ciudadanos, inventar un nuevo tipo de Estado, un Estado que *interactúe con la sociedad*. Pero ése no es el único aspecto a tomar en cuenta en la elaboración de nuevas políticas públicas para el libro, los lectores y las bibliotecas con cara al futuro; el otro aspecto es el relacionado con los efectos de la “informatización de la sociedad” que induce nuevos comportamientos, actitudes y valores que

* Director de Investigación del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado en Piura, Perú.

podrían distorsionar el papel estratégico que tienen las bibliotecas públicas para el desarrollo y la democratización de nuestras sociedades.

En Europa, la situación es más simple porque la transformación de los mecanismos predominantes de comunicación de información se ha hecho en forma secuencial. En este tipo de países occidentales se puede dividir la historia de la comunicación de los hombres en tres periodos: en primer lugar, los tiempos de la oralidad y de las literaturas orales que preceden a las bibliotecas; luego, la circulación de lo escrito gracias al alfabeto, tremendamente potencializada por la invención de la imprenta; ahora estamos asistiendo al advenimiento de la edad de los circuitos electrónicos y de las telecomunicaciones como nuevo soporte de la comunicación de lo escrito. Por el contrario, en América Latina las cosas son más complejas porque tenemos que promover *simultáneamente* la alfabetización, el acceso al libro y el aprendizaje de las nuevas tecnologías de información.

Antes de presentar algunas reflexiones sobre este nuevo contexto y nuevos desafíos, haré algunas precisiones técnicas sobre lo que representa una política pública. Algo en lo que los bibliotecólogos —como mediadores y elaboradores de un marco referencial en el sector cultural en el que se desempeñan— tienen una destacada responsabilidad profesional y ciudadana.

Políticas públicas

La identificación de las políticas públicas

Una política pública (PP), en rigor de términos, puede ser definida de manera mínima como “un programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o un espacio geográfico”.

Para establecer la existencia de una política pública o de un programa de acción gubernamental —lo que los politólogos norteamericanos denominan *a policy*—, es útil tomar en cuenta cinco grandes rasgos:

- a) Una PP se distingue por un conjunto de medidas, por un contenido; tiene una sustancia que le es propia. Muy concretamente, se reconoce usualmente a las políticas culturales, las que conciernen a las artes plásticas, la música, el teatro y la danza, y naturalmente el libro y las bibliotecas, seis grandes funciones:

- Conservación.
 - Creación.
 - Difusión.
 - Formación.
 - Administración.
 - Cooperación cultural.
- b) Una PP contiene elementos de decisión o de asignación de recursos cuya naturaleza es siempre autoritaria, o sea, impuesta por los actores gubernamentales (nacionales, locales) a su entorno social y administrativo. En tal sentido es una regla, que puede estar escrita o no escrita.
- c) Una PP designa un marco general de acción, el cual es algo más que la adición de actos puntuales aislados.
- d) Una PP afecta, por su contenido y por su impacto, a un cierto número de individuos, de grupos y de organizaciones: sus intereses, su situación, sus comportamientos van a ser cambiados en un sentido o en otro. Toda PP tiene un público, o más bien, varios públicos; en el caso que nos interesa: los lectores, los ciudadanos, las administraciones nacionales, regionales y locales, las profesiones que participan en la edición y difusión del libro, las bibliotecas como organizaciones e instituciones.
- e) Por último, una PP se establece para lograr objetivos y satisfacer intereses. Se define en función de normas y de valores explícitos o implícitos, y responde a expectativas y fortalece prácticas.

El referente de las políticas públicas

Quizás lo más importante es percibir que toda política pública plantea un problema de finalidad. Cuando un espacio de la vida social deviene objeto de una política pública, eso significa que existe un acuerdo entre una amplia parte de la opinión pública y las autoridades políticas para asumir que se trata aquí de una función del Estado. Asimismo cada política tiene como objeto reajustar los desequilibrios que puedan existir entre un sector y otros sectores, o entre un sector y la sociedad global. De esta manera, se puede definir también una política como un proceso de mediación social: gracias a ella cada sector se reproduce transformando y modificando sus relaciones con los otros sectores.

La relación de un determinado sector, en nuestro caso el libro y las bibliotecas por un lado y la sociedad global por el otro, tiene un núcleo duro:

la concepción que se tiene de la ubicación y el papel del sector en la sociedad. En consecuencia, impulsar una política pública consiste en construir una representación, una imagen de la realidad sobre la cual se quiere intervenir. Es en referencia a esta imagen cognoscitiva que los actores van a organizar su percepción del sistema, confrontar sus soluciones y definir sus propuestas de acción. Llamaré a este conjunto de imágenes, objetivos y perspectivas, que de una manera u otra materializan un proyecto de sociedad, el elemento referencial de una determinada política pública, a partir del cual se ubicarán los actores sociales.

Mediadores

En la elaboración de este “referente” y en la implementación de una política pública, tienen una importancia decisiva y una cierta complejidad las funciones que ejercen distintos tipos de mediadores, puesto que son éstos quienes combinan dos dimensiones fundamentales que se encuentran siempre en las políticas públicas:

- a) La dimensión intelectual, el proceso de construcción de una visión del mundo que va a determinar las percepciones de los actores que intervienen en el sistema de decisión.
- b) La dimensión del poder, es decir, el proceso por el cual se va a instaurar una nueva jerarquía entre los actores. Uno de los grupos presentes, que impone su liderazgo en el seno del sistema, logra una ubicación central en el proceso político.

En general, se reconoce un papel, no exclusivo pero sí preponderante, a tres tipos de actores:

- a) En primer lugar, los profesionales, o sea, los representantes de grupos sociales estructurados alrededor del ejercicio de una función o de una profesión. En el caso de las políticas públicas de la cultura y del libro, tienen una responsabilidad ineludible los editores y los bibliotecarios.
- b) En segundo lugar, una élite administrativa que se define por su capacidad de dominar la coherencia de los sistemas de decisiones: podemos llamarlos los tecnócratas.
- c) En tercer lugar, los representantes políticos de la sociedad. Sería un error considerar que profesionales y tecnócratas monopolicen la función de mediación; un hecho nuevo en América Latina, pero no solamente en el continente, es que estos últimos mediadores, que simbolizan y representan la voluntad de la ciudadanía, tiendan a ubicarse no solamente en

el Parlamento o en el Ejecutivo sino también en los Municipios y en las autoridades regionales.

En el sentido amplio de la palabra, estos tres tipos de mediadores son intelectuales: cumplen una función intelectual. Una particularidad de América Latina es el papel histórico que han jugado, en la creación de bibliotecas, grandes intelectuales vinculados al poder político:

- Sarmiento en Argentina.
- Vasconcelos en México.
- Andrade en Brasil.
- José Martí en Cuba.
- Jorge Basadre en Perú.

Estoy seguro de que, de una manera u otra, en cada uno de los países presentes es posible identificar el papel de grandes mediadores de este tipo.

América Latina es, como la calificaba Octavio Paz, el extremo occidente. Sin embargo, su transformación social y económica durante el presente siglo se ha realizado de manera distinta que en otros países occidentales. Es una región del mundo que, al revés de Europa, durante largo tiempo tuvo urbanización sin industrialización, industrialización sin competitividad y política sin economía. No es el único punto a tomar en consideración. América Latina y el Caribe es un subcontinente que tiene, a diferencia de otros, por ejemplo Europa o África, un alto nivel de integración cultural favorecido no solamente por una historia marcada por grandes épocas comunes —la conquista, la independencia, el surgimiento del Estado interventor y ahora las transiciones a la democracia—, sino también por la gran difusión del castellano y del portugués como idiomas gemelos. Siempre hubo circulación de ideas entre las élites intelectuales: solidaridad y amistad entre escritores y literatos, innumerables seminarios entre investigadores en ciencias sociales y muchos otros mecanismos de diversa índole.

Quizás eso explica la acogida y el peso que tiene ahora como elemento referencial, para la elaboración de nuevas políticas públicas latinoamericanas, el manifiesto de la UNESCO de 1994 sobre la biblioteca pública elaborado con la colaboración de la IFLA, Federación Internacional de Bibliotecas y Bibliotecarios.

Este manifiesto expresa la fe que debemos tener en la biblioteca pública como fuerza viva de educación, cultura e información. Define a la biblioteca pública como un centro de información que facilita a los usuarios,

sin discriminación alguna, todo tipo de datos y conocimientos, de acuerdo con sus necesidades. Al mismo tiempo, reafirma, por principio, que la biblioteca pública ha de ser gratuita y que ha de estar bajo la responsabilidad de las autoridades locales y nacionales, e introduce el concepto de red de bibliotecas públicas como distintas y complementarias de las redes de bibliotecas universitarias o las redes entre investigadores. Por último, insiste en que el bibliotecario es un intermediario activo entre los usuarios y sus recursos. Se necesita tanto su formación permanente para que pueda ofrecer servicios adecuados como el establecimiento de la cooperación con grupos de usuarios y otros interlocutores pertinentes a nivel local, regional, nacional e internacional.

Sin embargo, este trascendental referente internacional y el aporte directo de la IFLA como asociación no-gubernamental internacional e independiente han de ser apropiados y asumidos a nivel nacional por mediadores concretos, y por la opinión pública, para dar pie a la preparación, elaboración e implementación de futuras políticas públicas que tomen en cuenta dos enormes e inéditos desafíos: en primer lugar la redefinición (algunos dicen, la reinención del Estado latinoamericano) frente a la globalización, la liberalización de la economía, las nuevas exigencias de la competitividad sistémica, el fortalecimiento de la sociedad civil, los imperativos de la democratización, la integración social y la equidad. En segundo lugar, la situación inédita que representa para el libro y para las bibliotecas públicas la aparición acelerada de una sociedad de información en la cual las nuevas tecnologías incitan a modificar actitudes y valores que pueden desembocar en un verdadero culto a la información desligada de todas las herencias del pasado y de toda posibilidad de proyecto colectivo para el futuro.

La redefinición del papel del Estado en América Latina

Desde los años ochenta está manifestándose el fenómeno de la globalización financiera, cultural y tecnológica, yendo a la par con una crisis de la economía mundial que ha sufrido una reducción de sus tasas de crecimiento y con la aparición de un nuevo paradigma económico. Este último descansa sobre cambios en las formas de producción; las grandes unidades de producción integrada tienden a evolucionar hasta redes descentralizadas de empresas más pequeñas con capacidad de una mejor adaptación a las

variaciones del gusto, de las tecnologías y de los precios. Esta nueva forma de organización tiene como efecto la rápida tasa de crecimiento en innovaciones y nuevos conocimientos, así como el importante potencial de utilización de las nuevas tecnologías informáticas aplicadas a una multiplicidad de actividades, la reducción del ciclo de vida de los productos, la prioridad otorgada a la calidad de los productos como elemento fundamental de competitividad y, más que todo, la importancia creciente dada a las necesidades de los consumidores.

Las nuevas características del desarrollo socio-económico implican la existencia de un entorno macro-económico favorable, de nuevas infraestructuras físicas —en particular las que se relacionan con las comunicaciones— y una mano de obra instruida y calificada.

Estos fenómenos cuestionan las aptitudes del Estado y de la administración pública para regular la sociedad con las normas y los procedimientos que eran los suyos en las últimas décadas. Esos cambios socio-económicos, que afectan también a la política y la cultura, tienen un efecto directo sobre la crisis del Estado, agravada además por el endeudamiento del Estado latinoamericano que lo pone bajo la dependencia de los organismos de crédito internacionales. Pero no hay que olvidar el proceso de atomización de las sociedades latinoamericanas experimentado en los últimos años, que ha acentuado la desintegración del Estado. La pulverización de la sociedad en una multiplicidad de actores, lo que Matos Mar llama el desborde popular, ha hecho aparecer un chivo expiatorio: el Estado y el gobierno. Estas presiones, de abajo hacia arriba, han sido la causa principal de la crisis del Estado en América Latina.

Estamos, por lo tanto, en presencia de un cambio radical. Hasta los años setenta, se consideraba que en los países en desarrollo la acción del Estado era un factor central de aceleración de los procesos de acumulación y de modernización. Se justificaba la necesidad de la intervención pública por el débil nivel de las inversiones privadas, la subestimación de la racionalidad de los agentes del sector privado y la gran desigualdad de ingresos. El Estado y las administraciones públicas aparecían a menudo como la única estructura con capacidad para evitar la desintegración del país y para asegurar un mínimo de coherencia y de independencia nacional. Hoy estamos en una fase de transición en la que la reforma económica vinculada con medidas de reajuste estructural han anticipado la reforma del Estado. Estamos en el camino hacia un Estado post-neoliberal.

Lo que está en juego es no regresar al estatismo de ayer, pero tampoco encerrarse en las ilusiones de un antiestatismo simplista y falaz. Las críticas justificadas al clientelismo estatal, al paternalismo tecnocrático y al ritualismo burocrático que conjuntamente desconocen y destruyen la creatividad social, no implican por sí mismas que el Estado no tenga un papel central, aunque diferente, en el desarrollo, la modernización, la competitividad y la integración social. Sería totalmente equivocado que la emergencia de mercados libres podría por sí misma, en la ausencia de toda evolución institucional, solucionar los graves problemas económicos y sociales que padecemos: el mercado por sí solo no genera ni sustenta un orden social y, por el contrario, presupone una política de reordenamiento.

Está a la orden del día el establecimiento de nuevas relaciones entre el Estado, la sociedad, la política y la economía. En lugar de actuar sobre la sociedad, el Estado ha de interactuar con ella; en lugar de responder a presiones políticas puramente clientistas, el Estado ha de abrir el camino a la formulación de políticas públicas con una participación amplia y representativa.

El libro, la lectura, las bibliotecas, frente al culto de la información

El fenómeno de globalización lleva consigo cambios culturales. A la cultura “moderna” (la cultura de la emancipación) se superpone ahora la conocida como “post-moderna” (la cultura de la vida).

La edad de oro de las bibliotecas corresponde a la política cultural de la *emancipación*, que es idénticamente la cultura de la *modernidad* y que enfatizó la liberación del individuo frente a los imperativos dogmáticos de la tradición y la dominación de las jerarquías.

La cultura de la nueva edad de la información —algunos la llaman la cultura post-moderna, otros la califican como política de la vida— supone haber alcanzado un cierto nivel de emancipación frente a las tradiciones y las jerarquías y, por ello, un mayor nivel de autonomía se centra en la capacidad de opción de los sujetos, es una política electiva. Mientras que la política emancipatoria tiende a ampliar las opciones de los ciudadanos, la política de la vida que se refleja en la sed de información gira en torno a las capacidades de usar estas opciones, a las posibilidades de optar entre

múltiples alternativas ya existentes, en continua expansión, a partir de determinados valores y preferencias.

Este cambio cultural —o más bien esta naciente coexistencia de dos culturas que no están aisladas y pueden combinarse en grados diversos en las mismas personas y grupos— es el marco que nos permite interpretar el impacto de las nuevas tecnologías en el comportamiento de los jóvenes y la clase media y, de manera más general, el fenómeno de la “informatización de la sociedad”.

Durante siglos, el libro ha sido en occidente el vector más relevante para adquirir la sabiduría y el conocimiento. Hoy aparecen potentes industrias de información que difunden productos materiales: la micro-computadora, el scanner, el CD-Rom y el abanico de las nuevas tecnologías de información. Pero su finalidad es la circulación de información, la emergencia de textos inmateriales que aparecen de manera efímera sobre las pantallas en manos de los individuos.

En realidad, la profecía del canadiense Marshall Mac Luhan no se ha realizado a cabalidad. Sí somos ahora en alguna forma partícipes de la “aldea global”, pero no ha desaparecido la “galaxia Gutenberg”. Al contrario, cada año se incrementa el número de libros y de impresos editados y difundidos. Aunque, por cierto, el libro y la prensa escrita no son ahora los únicos medios de comunicación e información: a su lado están la televisión, la radio, el mundo audiovisual. En esta fase de la informatización de la sociedad, lo paradójico es que el uso de las micro-computadoras revaloriza la importancia de la escritura y la lectura, pero también modifica comportamientos y actitudes frente al texto.

Es probable que la aparición de la nueva sociedad de información, y de la informatización de la sociedad tienda a distorsionar la concepción que se tenía del conocimiento y a la vez ponga a las bibliotecas públicas frente a un enorme e inédito desafío. El destacado investigador venezolano Iraset Páez Urdaneta, prematuramente fallecido, afirma —en su artículo publicado en la *Revista Interamericana de Bibliotecología* de enero-junio, 1992— que nos encontramos en la tercera oleada de las bibliotecas públicas.

La primera de estas oleadas fue la creación de bibliotecas públicas, en Europa desde el siglo XIX y en América Latina principalmente en el siglo XX: la organización de colecciones en una institución que las ponía a la disposición de sus lectores y las aseguraba a una comunidad de usuarios a

fin de satisfacer sus necesidades de información para la formación, la recreación y la acción ciudadana.

La segunda oleada se refiere a los años setenta con la implementación de los programas NATIS y UNISIST en el marco de la UNESCO, que tenían, entre otros propósitos, la formación de sistemas de bibliotecas públicas en torno al patrimonio nacional, lo que fue realizado en el caso del NATIS para Venezuela a partir de 1974, y para la creación de una capacidad de intercambio de flujos de información científica y técnica en el caso de UNISIST. Cabe resaltar —como lo indica la tesis doctoral de Laura Genoveva Hurtado en ciencias de la Información y comunicación, traducida y publicada por el CIPCA y presentada hace algunos días en Piura— que la finalidad del programa UNISIST significaba el fortalecimiento de unidades de información especializada y no afrontaba a cabalidad las necesidades de las bibliotecas públicas.

La tercera oleada, la presente, se caracteriza por la proliferación de bancos de datos, de micro-computadoras y la implementación de autopistas de datos. En el nuevo paisaje, un hecho sintomático, que podría parecer a primera vista algo secundario, o de menor importancia, es el afán de grandes industrias, por ejemplo la firma IBM, para obsequiar equipos a universidades de prestigio para conseguir posteriormente un mercado. Lo que no es nada secundario es que en las prioridades gubernamentales, o del sector privado, está ausente el nexo que lógicamente debería existir entre el público y la computadora. Este nexo ausente es precisamente la biblioteca pública. Eso manifiesta que por el momento la naciente sociedad de información tiene como actor económico privilegiado, para no decir exclusivo, el individuo capaz de auto-equiparse y de auto-informarse fuera del entorno comunitario.

La respuesta que han de dar las bibliotecas públicas de América Latina no es, en primer lugar, de orden cuantitativo sino cualitativo; por supuesto, tenemos notables desfases de orden cuantitativo en comparación con los países del norte, por ejemplo: las bibliotecas públicas de Holanda, un país que cuenta con 15 millones de habitantes, prestan 162 millones de libros al año, mientras que las bibliotecas públicas del Brasil, uno de los pocos países de América Latina que cuenta con una red de escuelas de bibliotecología descentralizada y consistente y cuya población bordea los 160 millones de habitantes, presta 8 millones de libros por año.

Pero en la situación actual, no sería realista pensar que el problema de la ubicación y de la recuperación de las bibliotecas públicas se plantea

únicamente en términos cuantitativos. El aspecto cualitativo es tan o más importante. Si de costos se trata, es importante notar que por un monto determinado del costo de un servicio bibliotecario, en caso que el servicio sea de buena calidad, se trata de hecho de un servicio barato; al contrario, si se proporciona un servicio inadecuado, que no responde a las necesidades de los lectores, estamos en presencia de un servicio caro. Profesionales mejor formados, nueva capacidad de gestión, mejores ambientes, colecciones adecuadas al entorno, reforzamiento de las relaciones con el público son algunos de estos componentes de la dimensión cualitativa de una eficiencia renovada de las bibliotecas públicas de América Latina.

Es decisivo también tomar conciencia de que las bibliotecas públicas, a diferencia de los flujos de información que aparecen en forma efímera en las pantallas electrónicas, son instituciones concretas que tienen vida y consistencia propia. Son instituciones que tienen un papel estratégico en la estructuración y el fortalecimiento de la sociedad civil y en la participación ciudadana. Son también instituciones cuyas misiones son perennes a pesar de que su finalidad y su contenido puedan evolucionar.

Por último, la misión de las bibliotecas públicas es distinta a la misión de la Biblioteca Nacional (cuyo primer imperativo es la conservación del patrimonio nacional). Son también instituciones distintas a las unidades de información universitarias o los centros de investigación (reservados a profesionales de diversas disciplinas académicas). Lo que ha de caracterizar a las bibliotecas públicas de hoy y de mañana es que éstas no sean “la casa del libro” sino más bien —y eso es fundamental— “la casa de los lectores”. En ese sentido, más importante que el peso cuantitativo de sus colecciones es la actualización de éstas y su adecuación a las necesidades del lector para que este último esté en capacidad de incorporar en su práctica profesional y social un conocimiento que tiene valor cultural y económico. No tendrían real valor sus colecciones si un horario restringido dificulta el acceso a los lectores.

Naturalmente, las bibliotecas públicas han de modernizarse tecnológicamente. Ya la gran difusión de la micro-computadora y el uso de software Microisis de la UNESCO hacen la cosa factible. Pero entrarían en un callejón sin salida si su preocupación principal o exclusiva fuera la automatización de su catálogo y de su gestión. No se puede descartar el hecho de que los bibliotecólogos sean tentados hoy de convertirse en “ingenieros”

que saben diseñar bases de datos y elaborar catálogos de títulos, olvidando su función primordial de ser especialistas de la lectura y del lector.

En tal sentido, es relevante destacar la competencia excepcional que han sabido desarrollar los encargados de bibliotecas infantiles, porque han tenido que interesarse por el contenido de las lecturas para evaluar su pertinencia. Esta experiencia los califica como especialistas de lectura infantil de manera mucho más eficiente que la mayoría de los maestros y educadores que trabajan en las escuelas.

El papel de los profesionales de las bibliotecas públicas no es siempre el mismo en cualquier época y lugar. En los tiempos pioneros, el bibliotecario quería civilizar; era un “prescriptor”, alguien que prescribe libros, cuya vocación es proponer o imponer a su público las buenas lecturas. Hoy, en ciudades opulentas del norte, el bibliotecario se presenta a veces como un “elemento neutral” cuya tarea es gestionar y animar una suerte de supermercado del libro en el que el lector encuentra en abundancia de todo; hoy, en América Latina, el bibliotecario ha de ser un “mediador”, que fomente la relación entre el libro y el lector, que esté a la expectativa de las necesidades profesionales, culturales y cívicas del lector.

Esto implica que la cultura no sea tampoco considerada como un adorno para el ocio, algo que no sirve más que para humanizar el crecimiento económico. En realidad, la cultura es, antes que todo, la estrategia desarrollada por la sociedad —o por la gente— para vivir y adaptarse al medio. Es también el elemento clave para fortalecer y asumir la tradición cultural, tan rica y diversa en América Latina.

Conclusiones

Estamos en una situación inédita, compleja, difícil y que llama a la elaboración de nuevas políticas públicas para el libro, las bibliotecas públicas, el lector, el ciudadano. En esto tienen grandes responsabilidades los gerentes y los profesionales de las bibliotecas públicas, para la construcción de un nuevo “referente” que tome en cuenta el contexto y las necesidades de hoy.

Existen, sin embargo, factores positivos. Las reformas de la política económica realizadas en los últimos años han aliviado al Estado de algunas

de sus cargas del pasado. Paralelamente, gracias a su vitalidad, a su espíritu de iniciativa y a su dinamismo, el sector privado —incluido el sector informal— y la sociedad civil están creando un contexto nuevo para la conducción de los asuntos públicos y el comportamiento del Estado en América Latina.

Al mismo tiempo, el surgimiento de la tercera oleada puede ser asumida como una gran oportunidad para que la biblioteca pública redimensione su misión social y sea considerada como una herramienta clave de modernización para el desarrollo nacional, regional y local. Lo que implica que su gestión no sea concebida en función de un modelo estatal centralista, sino que maneje sus servicios en función de una dimensión local específica a cuyas expectativas responda y de cuya productividad dependa para garantizar su crecimiento y su consolidación.

En tal sentido, el intercambio de su experiencia, sus debates y sus propuestas tendrán una enorme importancia para que, con calidad, las bibliotecas públicas sean verdaderos “semilleros de cultura” y permitan al ciudadano de hoy y del mañana enfrentar con nuevas armas el cambio social, económico, político y cultural.